

Ultimátum: Minvu y propietarios aplazan una semana el desalojo de la megatoma

SAN ANTONIO. El Gobierno continúa las tratativas para fijar un precio de tasación. Alcalde Omar Vera dice que la expulsión es "impracticable".

Gian Franco Giovines D.
 gian.giovines@mercuriovalpo.cl

Las negociaciones para evitar el desalojo de la megatoma del cerro Centinela se acercan a un punto cúlmine. Este lunes, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. anunciaron conjuntamente que la Comisión Técnica, encargada de supervisar las tratativas para evitar el desalojo de la toma, extenderá su trabajo hasta el próximo miércoles 3 de septiembre. De no alcanzar un acuerdo para entonces, el Ejecutivo deberá acatar el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y, con ello, iniciar el desalojo gradual de la megatoma, con auxilio de la fuerza pública.

Fue hace medio año, el pasado 24 de febrero, cuando el Minvu anunció la suscripción de un protocolo de acuerdo junto a la Inmobiliaria San Antonio y la municipalidad de la comuna.

El avenimiento, supervigilado por la Corte de Apelaciones, estableció que los propietarios del inmueble, Ricardo Posada y Esteban Solari, manifestaban su voluntad de revisar una eventual propuesta de compra por parte de los ocupantes, con la condición de que el Estado fuera garante del proceso. Así, se acordó crear una Comisión Técnica —junto al Minvu y la Municipalidad de San Antonio— que funcionaría por seis meses con el objetivo de viabilizar la propuesta del Ejecutivo, que busca que las 4.100 familias que habitan el predio de 256 hectáreas puedan adquirir los terrenos.

La propuesta ideada por el Ministerio de Vivienda es ejecutar la compra a través de un inédito sistema de cooperati-

vas de vivienda, que permita a los ocupantes acceder a los terrenos mediante créditos y pagos en cuotas.

Sin embargo, el plazo otorgado por la Corte de Apelaciones para llegar a un acuerdo finalizaba este miércoles 27 de agosto y, pese a que en las últimas semanas se han intensificado las negociaciones, aún no llegan a buen puerto.

En este marco, y entendiendo las consecuencias que implicaría el desalojo de 11 mil personas para la comuna y la Región, la Inmobiliaria San Antonio y el Ministerio de Vivienda decidieron extender en nueve días el plazo las tratativas hasta el próximo miércoles 3 de septiembre, en lo que es considerado como un "ultimátum" entre las partes.

A través de un comunicado, ayer la Comisión Técnica constituida entre la Inmobiliaria San Antonio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Municipalidad de San Antonio y la Subsecretaría del Interior informó que las partes "en sesión de fecha 22 de agosto han resuelto unánimemente y con el acuerdo de sus mandantes continuar el trabajo de esta Comisión, bajo los términos establecidos en dicho protocolo (de acuerdo), hasta el 3 de septiembre, para acercar posiciones".

"En caso contrario, se hará operativo el fallo de la Corte de Valparaíso", aseguró la cartera liderada por el ministro Carlos Montes.

TRES PUNTOS SON CLAVE

Según conocedores de las negociaciones, son tres las condiciones que deben acordarse para que los dueños se decidan a vender el terreno.

Lo fundamental es, en primer lugar, alcanzar un acuerdo sobre el precio del terreno. Este es uno de los puntos que ge-

nera mayores diferencias, puesto que, mientras los propietarios exigen un precio de 0,61 UF por metro cuadrado, el Ministerio de Vivienda propone una tarifa de 0,21 UF por m², pese a que la cartera ha aumentado su oferta en las últimas semanas.

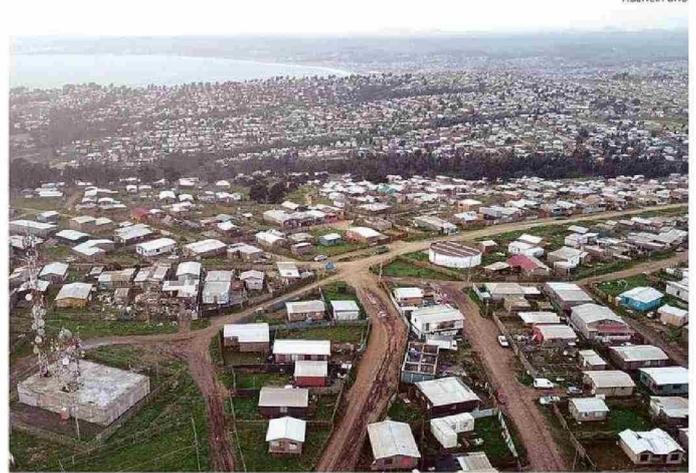
Una segunda condición fundamental es que el Ministerio de Vivienda asegure a los dueños —de forma explícita, mediante un documento— que las cooperativas serán financiadas por el Banco Estado. Lo anterior, dado que los usurpadores del terreno "no cuentan con los recursos suficientes y tampoco son sujetos de créditos", afirma una de las fuentes conocedoras de las negociaciones.

Un tercer punto es que el Estado indemnice por lucro cesante a los propietarios en caso de no alcanzar un acuerdo tras estos meses de negociaciones. Es decir, "que haya una garantía estatal que cubra la eventualidad de que no se llegue a un acuerdo final. Alguien debe pagar los meses perdidos", señala una fuente a este Diario.

DESALOJO "IMPRACTICABLE"

Los escasos resultados en los tres grandes puntos de acuerdo no son alentadores y, en ese marco, el alcalde de San Antonio, Omar Vera (ind.) expone su preocupación ante un eventual proceso de desalojo. Y es que a juicio del jefe comunal, es totalmente inviable el desplazamiento de las 11 mil personas que habitan el predio.

"El desalojo es impracticable, desde el punto de vista social y de seguridad. No tenemos ninguna capacidad, en términos de nuestros recursos de Carabineros, para generar un desalojo de esa magnitud. Además, la municipalidad no tiene las instalaciones para proveer lugares de acogida para las personas que se vayan



11 MIL PERSONAS VIVEN EN EL TERRENO USURPADO A ESTEBAN SOLARI Y RICARDO POSADA.

"Yo espero también, y lo voy a decir en estos términos, que la situación de la megatoma de San Antonio no sea algo que se traspase al próximo gobierno".

Rodrigo Mundaca
 Gobernador regional

"El desalojo es impracticable. No tenemos ninguna capacidad, en términos de recursos de Carabineros, para generar un desalojo de esa magnitud".

Omar Vera
 Alcalde de San Antonio

"Tenemos la ilusión de que vamos a completar la compra de estos predios y vamos a conformar un barrio. Esa es nuestra esperanza".

Susana Carvallo
 Presidenta de cooperativa de vivienda formada por ocupantes

desalojando. Es impracticable", insiste el jefe comunal.

"El camino es el diálogo y llegar a un buen acuerdo. Por ahí hay un dicho, que dice que es mejor llegar a un buen acuerdo que a un mal juicio", completó el alcalde sanantonino.

En cuanto a las coordinaciones para ejecutar el desalojo, Omar Vera afirma que, a la fecha, no se ha concretado una reunión de planificación junto a la Delegación Presidencial y Carabineros, "porque yo creo que se está a la espera del resultado de la mesa tripartita".

MUNDACA EXIGE CELERIDAD

En paralelo, la máxima autoridad regional, el gobernador Rodrigo Mundaca, reconoció que "en este minuto hay una disparidad entre la propuesta que está haciendo el Gobierno versus lo que está pidiendo precisamente el propietario".

En ese contexto, instó al Ejecutivo a no seguir postergando las soluciones y no traspasar el conflicto al siguiente gobierno.

"Esperamos que no proceda el desalojo en este minuto, si es que faltan pequeños detalles. Y yo espero también, y lo voy a decir en estos términos, que la situación de la megatoma de San Antonio no sea algo

que se traspase al próximo gobierno. Yo espero que esto se resuelva ahora, con este gobierno, porque finalmente si no hay una actitud diligente, que ponga en la centralidad la solución, va a ser un problema que vamos a tener y lo vamos a seguir arrastrando", apuntó la autoridad.

FAMILIAS ESTÁN INQUIETAS

Desde la perspectiva de los ocupantes del terreno, Susana Carvallo, presidenta de una de las cooperativas formadas por el Minvu, reconoció que "las familias están inquietas, están con incertidumbre, pero, por otro lado, confiadas también que sí va a haber solución. No sabemos cuál, pero sí va a haber solución".

"Se ha hecho un arduo trabajo con el Estado. Todas las comunidades están trabajando y tienen disposición a comprar. Estamos haciendo una pega que, si bien ha sido larga, tenemos la ilusión de que vamos a completar la compra de estos predios y vamos a conformar un barrio. Esa es nuestra esperanza", dice Carvallo.

Desde el Ministerio de Vivienda enfatizaron que las conversaciones siguen en curso. "Esperamos que se encuentre una solución", concluyeron. **CB**